

Texto de subversivos documentos del Partido Demócrata Cristiano

Los siguientes son los textos de los documentos preparados por Andrés Zaldívar y Tomás Reyes para conocimiento de las bases demócratacristianas. Se sabe que estos documentos ya están circulando en el exterior. Concretamente se sabe que los dos informes aparecieron en Venezuela.

ANDRÉS ZALDIVAR

El documento que presentamos a la consideración del Plenario está dividido en dos partes. Una primera, que describe someramente la profundidad de la crisis que vive el país, y otra que propone definiciones y criterios para una acción que supere ese estado de cosas.

Afirmamos que el país atraviesa una de las etapas más críticas de su vida como nación. De manera muy breve hacemos referencia a las principales evidencias de este proceso en el plano económico, el de las relaciones internacionales, el político-institucional y en el ámbito de lo social.

Creemos, también, que el país no es plenamente consciente de la gravedad de la situación por la que atravesamos. Es por eso que llamamos al partido a asumir plenamente sus responsabilidades en la solución de la crisis, dado que él es una de las organizaciones sociales más estructuradas de Chile, que representa a parte significativa de los chilenos de las más variadas profesiones y capas sociales: a que dispone de parte importante de la élite política, sindical, intelectual y profesional del país.

La segunda parte del documento plantea una serie de definiciones y criterios para una acción que se orienta a materializar en los próximos años un doble proyecto: un proyecto de sociedad para Chile y un proyecto de partido y sus alianzas.

Como proyecto de sociedad se propone recrear las condiciones para una paz estable entre los chilenos, fundada en la democracia como sistema político y el mejoramiento de la calidad de la vida de nuestros compatriotas, partiendo por los postergados, como objetivo del desarrollo político, social, económico y cultural del país.

El proyecto de partido es la constitución de una organización moderna y eficaz, fundada en los valores de la libertad, solidaridad y justicia que pueda impulsar una gran alianza política capaz de gobernar.

Para la consecución de estos objetivos se cree necesario desarrollar una acción que se ha definido en una serie de proposiciones.

Las cuatro primeras proposiciones contenidas en el documento describen el marco en que creemos se debe desarrollar el proceso de democratización del país. En tal sentido representan criterios de carácter general que se formulan a sectores más amplios que nosotros mismos y que perfectamente podrían orientar la acción política de grupos y actores que no compartan nuestra ideología ni nuestro programa. Tales proposiciones son: la democratización, como un proceso gradual objetivo y dinámico (proposiciones I y II). La ruptura del círculo del odio y su sustitución por una consideración racional del problema de la paz (proposición III) y la anticipación democrática como estilo que marque la acción de los demócratas (proposición IV). Estos criterios son formulaciones abiertas a todos los grupos que sincera y honestamente busquen la democratización (proposición I, II, III) o invitaciones generosas a los más extensos sectores demócratas a compartir, a lo menos, un común estilo político (proposición IV).

A diferencia de las cuatro primeras proposiciones, que son de carácter general, las siguientes diez tesis se refieren específicamente al camino político de la Democracia Cristiana, procurando definirlo con la mayor precisión, de modo que no quepan respecto de él dudas ni pueda prestarse para la creación de confusiones interesadas.

En primer lugar se establece el principio rector de la estrategia, que es una definición de la democracia (proposición V); seguidamente se describen someramente las fases tácticas que son tres: de la denuncia y el testimonio; de la persuasión y de la construcción de la plataforma gubernamental (proposición VI).

A continuación se precisan aquellos grupos que, en razón de profundas diferencias la Democracia Cristiana excluye de una alianza política y de un programa de gobierno común. Tales son la derecha fascista o neofascista (proposición VII) y los grupos de izquierda revolucionaria partidarios de la vía armada (proposición VIII). A la vez se define la política demócratacristiana como independiente y ajena de los sectores de la Unidad Popular y que es imposible una alianza con el Partido Comunista (proposición IX). Respecto de la derecha política tradicional, conjuntamente con denunciar la masiva y abyecta traición que ha hecho a sus tradiciones e ideales, se plantea la necesidad del surgimiento de nuevos grupos conservadores (proposición XI).

Como base fundamental para un camino para Chile se plantea (proposición XII) la unión de los humanistas en un movimiento mucho más amplio que la Democracia Cristiana y que se nutre con hombres provenientes de otras creencias y tradiciones que las del Partido. Esa unión debe hacerse en torno de un gran proyecto histórico del

que se definen sólo sus parámetros más esenciales, y que considera como elemento fundamental la autonomía y el fortalecimiento de las organizaciones del pueblo. En ese marco se postula como fundamento terminar con el aislamiento entre los militares y la ciudadanía (proposición XIII). Finalmente se señala a la renovación de los partidos políticos como una de las grandes exigencias de la democratización (proposición XIV).

La renovación partidaria a que se alude en este documento se considera que alcanza a todas las agrupaciones políticas chilenas, y, por supuesto, también a la Democracia Cristiana que vive, no menos que el resto del país, una crisis muy grave. Las dos tesis finales se refieren a la organización y a la vida interna de la Democracia Cristiana y a los criterios que deben orientarla. Una se refiere a la necesidad de una revisión crítica de su pasado y a los criterios que deben presidirla (proposición XV) y la siguiente, a algunos criterios para el funcionamiento de una organización democrática, moderna, disciplinada y eficaz (proposición XVI).

TRES FASES DE ACCION

1.— Fase de la denuncia y el testimonio:

a) Formulación crítica;

b) Difusión de planteamientos fundamentales;

c) Solidaridad con los perseguidos.

2.— Fase de persuasión:

3.— Fase de construcción de una plataforma gubernamental. Lo fundamental son las relaciones con otras fuerzas políticas:

a) Rechazo absoluto a los grupos de tendencia fascista;

b) Rechazo absoluto a los grupos de izquierda revolucionaria partidarios de la vía armada;

c) Política independiente y ajena a los avatares de la Unidad Popular;

d) Actitud racional frente al problema comunista (rechaza una alianza o programa con el Partido Comunista).

e) Nuevos grupos conservadores deben surgir tras la deserción democrática de la derecha tradicional.

D. C.

1.— Necesidad de una revisión crítica de nuestro pasado y los criterios que deben presidirla. Tres principios fundamentales:

a) Globalidad,

b) Objetividad,

c) Identidad,

d) Debe abrirse a las relaciones políticas y sociales completas y a un período significativo de tiempo;

e) Los juicios deben probarse con hechos y no con apreciaciones o suposiciones de intenciones;

f) Padrón de análisis deben ser los valores del Partido. De lo que se trata es enjuiciar la política D.C. en cuanto ella haya revivido o no los valores que invoca.

2.— Criterios para el funcionamiento de una organización democrática moderna y eficaz:

a) Discusión y decisión impersonal y objetiva;

b) El derecho de la minoría, controlado, pero no obstruido;

c) Conciencia de la línea;

d) Coraje individual y colectivo;

e) Consulta amplia;

f) Unión de los humanistas y un movimiento social fuerte y autónomo como bases fundamentales de un gran proyecto para Chile. Plataforma esencial:

(1) derecho humanos como un valor universal,

(2) tendencia a la igualdad y la justa distribución del producto económico,

(3) democracia política,

(4) pluralismo ideológico y social,

(5) Un nuevo proyecto para Chile requiere romper el aislamiento de los militares y la ciudadanía.

(6) La renovación de los partidos políticos es una de las grandes exigencias de la democratización.

PRIMERA PARTE: LA CRISIS QUE ENFRENTAMOS

El país vive una de las etapas más críticas de su vida como nación. Ello es el resultado de tres fenómenos cuyos efectos indeseables se han ido acumulando hasta desembocar en la actual coyuntura. El primero en el tiempo es la crisis del sistema político de la Constitución de 1925, hecho que ya era hondamente perceptible hacia los años 1969 y siguientes. El segundo es la crisis económica, política, social y militar en que se traduce el gobierno de la Unidad Popular. El tercero es la política del Gobierno del general Pinochet.

Todos estos fenómenos cubren un período de casi una década, y, de no ser resueltos a breve plazo, amenazan con llevar al país a un período de grave disolución.

A continuación detallamos brevemente algunas de las principales manifestaciones de este fenómeno que es uno de los más complejos y dramáticos por el que haya atravesado el país.

En el plano económico, la situación de Chile está referida al resto del continente latinoamericano, que es la zona del mundo que crece más rápidamente. Entre los años 1968-76, América Latina en su conjunto duplicó su riqueza. Dentro de ella Chile fue, entre todas las naciones del área, la que experimentó una peor situación. No sólo no creció en esos años, sino que disminuyó su producto nacional en términos absolutos. Así, mientras en menos de una década

países como Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala o Panamá se duplicaron en riqueza y en poder, Chile retrocedió. La gravedad de este hecho lo ilustra una cifra dramática: la comparación de nuestro producto per-cápita. En 1969 disponíamos del tercer producto per-cápita de América Latina, después de Argentina y Venezuela. Ocho años después tenemos el 10º y nos ubicamos al mismo nivel de Guatemala y Ecuador. Si la comparación la hacemos con nosotros mismos, la riqueza de Chile per-cápita es en 1976 igual a la que el país tenía en 1962, vale decir, hace 14 años atrás.

Las evidencias de nuestra crisis económica son penosas. La palpamos en la comparación del estancamiento de nuestras ciudades con la pujanza de las demás capitales de América Latina; en nuestros índices de cesantía; en la emigración de nuestros científicos acosados por la miseria de sus remuneraciones que sólo es comparable a la pobreza de sus laboratorios; en la falta de expectativas de trabajo para cientos de miles de jóvenes que buscan integrarse a la vida activa; en el constante cierre de las industrias nacionales; en la vertical caída de nuestra situación en el concierto de las naciones americanas, etc.

La dimensión de la crisis de nuestras relaciones internacionales alcanza límites que creemos que nadie imaginó. Nuestro gobierno es probablemente el único en el mundo que no concita la simpatía ni la adhesión de ninguna nación industrializada de la tierra. Hoy nuestras relaciones con los Estados Unidos han llegado a un grado de extrema dificultad; las relaciones militares entre los dos países se encuentran fuertemente deterioradas y las vinculaciones económicas presentan un cuadro similar; por otra parte, hacia el futuro no se presentan posibilidades reales de variar esta situación —a menos que exista un cambio de política en Chile— pues es decisión del nuevo gobierno norteamericano condicionar sus relaciones con el régimen chileno al respeto efectivo de los derechos humanos. Las relaciones chilenas con Europa Occidental arrojan un balance no menos malo. En esa región del mundo, profundamente conmocionada por los derechos humanos, como sistema político y la democracia, los gobiernos, casi sin excepción, se encuentran bajo control de socialdemócratas, demócratacristianos o liberales políticamente avanzados, es ciertamente imposible que el actual gobierno chileno pueda aspirar a algo más que a la mantención de relaciones puramente protocolares, hecho que ya no se da ni con Inglaterra ni con Italia. Nuestra situación en América Latina es también la peor que haya conocido el país en toda su historia; no mantenemos relaciones diplomáticas con México; Venezuela ha retirado su embajador; nuestra situación con Colombia y Panamá es de creciente distanciamiento; los regímenes militares de Argentina y Brasil procuran que en el ámbito internacional sean reconocidas sus claras diferencias con la Junta Militar chilena; nuestro gobierno ha cometido el error monstruoso de retirarse del Pacto Andino, con lo cual ha contribuido a su propio aislamiento. Finalmente, toda esta crisis tiene lugar en momentos en que viejas querrelas de límites comienzan a reavivarse con fuerza extraordinaria.

El ámbito de lo político-institucional presenta un cuadro tanto o más dramático. Si nos atenemos al solo texto de las Actas Constitucionales recientemente promulgadas, la situación es la siguiente: El Gobierno de Chile —no de hecho sino de derecho— carece no sólo de los atributos de un gobierno de-

mocrático, sino también de los característicos de la forma republicana: el Gobierno de Chile no es electivo; no es temporal, en el sentido que no tiene límite de duración; no es responsable, en cuanto no está sujeto al control de otros poderes o del pueblo. La Junta de Gobierno ejerce los poderes constituyente y legislativo; el Presidente de la Junta, el poder ejecutivo. De esos tres poderes —los más esenciales en la vida de la nación— está enteramente ausente la soberanía del pueblo. El pueblo no participa en modo alguno en ninguno de ellos. No menos grave es la situación jurídica de los derechos humanos consagrada en el Acta Constitucional N° 4. De conformidad a este texto se ha establecido legalmente un sistema en virtud del cual, por sí y ante sí, la Junta Militar puede suspender la vigencia de los derechos humanos declarando, sin otra restricción que su propia voluntad, el estado de emergencia, el que puede prorrogar indefinidamente. Al establecer el "estado de subversión latente", la legislación vigente ha creado las condiciones para entronizar el estado de emergencia como la situación permanente de gobierno del país y con ello el otorgamiento al Presidente de la República de la facultad de disponer a su entero arbitrio de la libertad y los derechos de las personas. Así, la llamada "nueva institucionalidad" ha consagrado una forma de Estado en que los poderes Constituyente, Ejecutivo y Legislativo se concentran en las manos de cuatro gobernantes no electos, sin término de mandato, no sujetos a otro control que el de sus propias conciencias, los que manejan además la suma del poder militar, la policía y los servicios de seguridad, estos últimos a través de una legislación secreta, con lo cual representan hoy probablemente en el mundo la forma política de un país civilizado que admite el más alto grado de concentración de poder.

En el plano social, el país vive un proceso de grave desintegración, las organizaciones del pueblo: gremios, colegios profesionales, sindicatos, partidos políticos, juntas de vecinos, organizaciones estudiantiles, están siendo asfixiadas de manera dramática. Una legislación torpe y represiva impide cualquier forma de vida a estas instituciones, las que van desfalleciendo por la falta de renovación de sus directivas, la carencia de debate y crítica interna y la imposibilidad de desarrollar alguna función social de cara a sus propias comunidades o a las organizaciones del Estado. Una segunda dimensión de esta crisis de la estructura social es el proceso de progresiva destrucción de elementos básicos de la vida chilena que fueron factores de progreso y estabilidad. Tal es el caso de la llamada clase media, que ha sido sometida a un dramático proceso de pauperización que amenaza con destruir su status económico, social y cultural. Hemos visto implementarse una verdadera política de persecución económica en contra de sectores importantes de la Administración Pública. Instituciones públicas chilenas que fueron señeras en el continente han sido desmanteladas y sus cuadros humanos valiosos, formados en varias décadas, lanzados a la calle con increíble frivolidad. Este proceso desquiciador se extiende también a otras capas de la sociedad, como los pequeños empresarios y el artesano, cuyas actividades se han visto dramáticamente disminuidas, cuando no simplemente terminadas. Expresión del mismo fenómeno es el éxodo de decenas de miles de profesionales y de estructuras académicas completas en los principales centros universitarios del país. Una tercera dimensión de esta crisis de la es-

tructura social es la pérdida del sentido de la solidaridad, fruto de una política económica que ha corrompido el sistema de premios y castigos de la sociedad, elevando la condición de principal actividad nacional la usura y la especulación, y a la de más alto valor ético, el afán de lucro, el consumo suntuario y la ostentación del dinero. No es una frase decir que los grupos de predicadores del odio entre las clases sociales se han trasladado desde los "cordones industriales" en el tiempo de la Unidad Popular a los actuales "cordones financieros". Bajo el peso de estos tres fenómenos que hemos descrito, el tejido social chileno se va destruyendo peligrosamente.

La crisis que nos afecta es profunda y requiere de un gran esfuerzo para superarla.

Frente a esta situación pesa sobre nosotros una alta responsabilidad. Somos una de las organizaciones sociales más estructuradas del país. Representamos una parte significativa de los chilenos en las más variadas profesiones y capas sociales. Disponemos de parte importante de la élite política, sindical, intelectual y profesional. Es por ello que amplios sectores del pueblo creen y esperan de nosotros una contribución a la solución de la crisis.

El presente documento es una propuesta que define los lineamientos generales para nuestra acción en los próximos dos años. En tal sentido sus proposiciones procuran servir para la práctica política en la actual coyuntura: orientar nuestros actos de hoy y del mañana inmediato. Y esperamos que sean esas definiciones respecto de nuestros próximos actos las que vayan anunciando el tipo de proyecto histórico a que nos orientamos en el mediano y largo plazo. Ni el país ni nosotros anhelamos una nueva utopía. Lo que la hora actual requiere son las definiciones básicas que nos permitan caminar desde hoy hacia una sociedad que estará fundada en los valores del humanismo, pero cuyos contornos precisos no es posible definir hoy, sino que iremos descubriendo y anunciando en nuestra conducta política concreta.

Nuestra gran tarea es "ganar la democracia".

SEGUNDA PARTE: DEFINICIONES Y CRITERIOS PARA LA ACCION

Nuestra acción se orienta a materializar en los próximos años un doble proyecto: un proyecto de sociedad para Chile y un proyecto de Partido y sus alianzas.

Como proyecto de sociedad anhelamos recrear las condiciones para una paz estable entre los chilenos, fundada en la democracia como sistema político, y el mejoramiento de la calidad de la vida de nuestros compatriotas, partiendo por los postergados, como objetivo del desarrollo político, social, económico y cultural del país.

El proyecto de Partido es la constitución de una organización moderna y eficaz, fundada en los valores de la libertad, solidaridad y justicia que pueda impulsar una gran alianza política capaz de gobernar.

Para la consecución de estos objetivos creemos necesario desarrollar una acción que esté orientada por las proposiciones que formulamos a continuación.

I.— PROPOSICIONES GENERALES SOBRE LA DEMOCRATIZACION

Las cuatro primeras proposiciones

RECUPERE EL I. V. A.
En cada pago parcial o total de sus primas otorgamos factura.
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS
TEMUCO — VARAS 932 — FON0 34986

HOTEL
Aitúe - Temuco
SE VENDE
Alhajamiento e instalaciones patente etc. Tratar: Abelardo Valdésquez P. Temuco Bulnes 751. Fono 34933 Casilla 1185.

Banco de Chile
DIVIDENDO
Comunicamos a los señores Accionistas que a partir del día 30 de Marzo en curso, se repartirá el dividendo N° 165 de \$ 0,50 por acción.
EMISION DE ACCIONES LIBERADAS
El Directorio acordó emitir 60.000.000 de acciones de un valor nominal de \$ 1 cada una, como primera etapa del aumento de capital acordado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de Enero Ppdo., las que serán distribuidas entre los señores Accionistas, liberadas de pago, en la proporción de una por cada dos que posean en la fecha del cierre del registro respectivo.
Las acciones sobrantes en el prorrato, serán vendidas en Bolsa a un precio no inferior al nominal, y su producto distribuido entre los señores Accionistas que tengan derecho a esas fracciones.
CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS
Para los efectos del dividendo y de la emisión que hemos señalado, el Registro de Transferencias permanecerá cerrado desde el 17 hasta el 25 de Marzo en curso, ambas fechas inclusive.
EL GERENTE.-
SANTIAGO 12 de Marzo de 1977.

VENTA DE EDIFICIOS EN PROVINCIAS
EL BANCO CENTRAL DE CHILE, SOLICITA PROPUESTAS A LOS INTERESADOS EN ADQUIRIR LOS EDIFICIOS DE SUS SUCURSALES EN LAS LOCALIDADES DE:
CHILLAN Y LOS ANGELES
BASES Y ANTECEDENTES, SE ENTREGARAN EN SANTIAGO, MONEDA N° 975, PISO 12; DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, DE 10 A 13 HORAS, DESDE EL 14 AL 18 DE MARZO/77.

BANCO CENTRAL DE CHILE

LOS DOCUMENTOS SECRETOS DE LA DC

contenidas en el presente documento describen el marco en que creemos se debe desarrollar el proceso de democratización del país. En tal sentido representan criterios de carácter general que formulamos a sectores más amplios que nosotros mismos y que perfectamente podrían orientar la acción política de grupos y actores que no comportan ni nuestra ideología ni nuestro programa. Tales proposiciones son la democratización, como un proceso gradual objetivo y dinámico (proposiciones I y II). La ruptura del círculo del odio y su sustitución por una consideración racional del problema de la paz (proposición III) y la anticipación democrática como estilo que marque la acción de los demócratas (proposición IV). Estos criterios son formulaciones abiertas a todos los grupos que sincera y honestamente busquen la democratización (proposiciones I, II y III) o invitaciones generosas a los más extensos sectores democráticos a compartir a lo menos un común estilo político (proposición IV).

PRIMERA PROPOSICION: LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PROYECTO SOCIAL ES UN PROCESO DE TRANSICION GRADUAL

Ni la paz social ni la nueva democracia ni la nueva forma de gobierno orientada al real mejoramiento de la calidad de vida de la población surgirán de un acto social único que rompa abruptamente la continuidad histórica. Poderosos factores de orden político indican que habrá una transición gradual hacia la democracia, pues el actual estado de cosas en Chile no está asociado a personas determinadas, sino a realidades políticas muy concretas, como ser la función política del poder militar, la situación internacional de Chile, la estructura económica, factores todos que son altamente estables y de los que no cabe esperar cambios radicales, sino evoluciones graduales. Creemos además, que ello no sólo es el camino más probable, sino también el más conveniente para los intereses del país, pues la Historia nos muestra que, por lo general, la abrupta caída de una dictadura no es sino el inicio de un largo proceso convulsivo y contradictorio en el que, en definitiva, los sectores antidemocráticos primitivamente derrotados logran a muy corto plazo reconquistar un medio ambiente que le es propio.

La tarea que intentamos es, por tanto, contribuir a poner al país en marcha hacia un nuevo proyecto social, seguros de que en política no es posible resolver todos los problemas simultáneamente y en un mínimo de tiempo.

Debemos pues prepararnos para actuar en un camino en que a través de pasos sucesivos y de diferentes etapas iremos logrando la materialización de una nueva democracia y de una fórmula de gobierno satisfactoria.

Lo anterior significa que nuestro camino político desecha la visión apocalíptica en que la caída de la dictadura es un hecho abrupto y total, y la aparición de la democracia, en esplendor y plenitud, un acto repentino, casi mágico.

SEGUNDA PROPOSICION: LA DEMOCRATIZACION GRADUAL ES UN PROCESO DINAMICO Y OBJETIVO

Nuestra afirmación de que la democratización es un proceso gradual no puede ser entendida, bajo ningún respecto, como que estemos proponiendo una "media democracia" o "tres cuartos de democracia" como proyecto político satisfactorio para Chile. El objetivo es la democracia plena. El gradualismo que propugnamos nace del hecho que creemos que ese objetivo sólo es posible alcanzarlo a través de etapas sucesivas.

Afirmamos, también, que la democratización es un proceso profundamente dinámico, en donde cada etapa es, a la vez, generadora de nuevas y mayores exigencias de democratización.

En el desarrollo de esta transición, el progreso o la derrota lo indicará una justa relación entre el fin perseguido — la democracia plena — y las formas concretas que vaya adquiriendo la vida institucional, política, social, cultural y económica del país.

La nueva democracia es una tarea de ahora mismo, no de mañana y mucho menos de una nueva generación. La democracia no se construye a través de medios que nieguen en la vida diaria de hoy los valores que se dice propugnar para un futuro remoto. La calificación de si una política es o no democrática no es un asunto de intenciones de los grupos políticos, sino de hechos objetivos. Es democrática toda acción que modifica las circunstancias adversas de hoy y las convierte de más en más en condiciones reales para una nueva democracia. Tal es el criterio que debe presidir el enjuiciamiento de nuestra propia conducta primero, del gobierno y de los demás grupos de oposición después.

Naturalmente debemos estar atentos para evitar escrupulosamente los peligros que amenazan a cada política gradualista que la prudencia pueda llegar a ser invocada como la excusa para una acción retardada, pusillánime o cobarde, que acabe disminuyendo la presión en favor de la democratización o, peor aún, otorgando conformidad al pueblo para aceptar la dictadura como un hecho difícilmente revocable.

TERCERA PROPOSICION: LA SUSTITUCION DEL MIEDO RECIPROCO POR UNA CONVIVENCIA FUNDADA EN LA PAZ

Los regímenes de fuerza comúnmente traen aparejado, como consecuencia de sus propios métodos, un clima de miedo generalizado del que se libran sus propios actores. Es lo que, sin duda, está ocurriendo en el Chile de hoy.

Esta circunstancia conduce al país a vivir prisionero en un anillo de amenaza-terror-represión-contrarrepresión que en parte se autoalimenta a sí mismo y que de modo primordial es alentado por los sectores más antidemocráticos del espectro político chileno.

Hoy por hoy, a través de la amenaza de la contrarrepresión se propone la postergación indefinida de la convivencia política y su sustitución por la cruda lógica de una escalada de violencia en que el precio de la derrota es la privación de derechos políticos, en el mejor caso, o la prisión o la muerte, y en que el imperativo de la victoria es la persecución y el aniquilamiento físico de los derrotados.

Este proceso acumulativo de odio debe ser detenido, pues dentro de él se hace impensable una nación democrática. Su detención es un interés compartido de toda la sociedad chilena sin excepciones.

Respecto del gobierno, sólo una infinita ceguera puede llevarle a postular una guerra permanente, sin fin, cuyos resultados, por otra parte, no le son favorables, pues ella compromete en su contra a grupos siempre crecientes de la comunidad nacional e internacional. Las bayonetas no son, no han sido ni serán un sustituto a la convivencia política. Y mucho menos en un país como Chile, que tiene una tan larga tradición democrática y que está situado en un contexto de relaciones internacionales donde el respeto a los derechos humanos es requisito esencial para su aceptación en aquella parte de la comunidad internacional que le es más propia. Es, pues, imperativo para el gobierno pensar en el problema de la paz, en la forma como este estado de guerra interna empieza a ser sustituido por un régimen que a través de medios políticos va garantizando una paz estable entre los chilenos.

CUARTA PROPOSICION: UN CAMINO DE ANTICIPACION DEMOCRATICA: TESTIMONIO PERSONAL Y SOCIAL

La vida política bajo la Junta Militar de Gobierno parece encerrarse en una especie de círculo vicioso: por una parte, la dictadura impide el funcionamiento de las organizaciones representativas del pueblo y, por otra, el no funcionamiento adecuado de esas instituciones facilita la sobrevivencia de la dictadura.

El fenómeno que describimos es real y, a la vez, es la esencia de la actual situación chilena. Ciertamente, el régimen actual no sería el que es si no reprimiera fuertemente a toda forma de oposición política. Remover esas circunstancias es el objeto de nuestra lucha. Y la dificultad de nuestra tarea estriba precisamente en que debemos cambiar esos factores, que son tan adversos, en el marco de una confrontación desigual donde todo el poder — poder político, poder económico, poder de comunicación social, poder policial y represivo — es manejado en contra nuestra.

La constatación de la circunstancia que describimos alienta, sin duda, el derrotismo y la falta de esperanza. En otro caso, fomenta ilusiones que son menos peligrosas. Vale la pena mencionar estas formas de escapismo, pues ellas constantemente emergen de un modo u otro.

—Ilusiones superestructurales, que confían en una salida que sea fruto de personas y contactos propios de la vida política pasada.

—Ilusiones tecnocráticas, que creen que una alternativa política real surge de la mera elaboración técnica de un programa de gobierno.

—Ilusiones catastróficas, que esperan de la hondura de la crisis del actual gobierno el pasaje a la democracia.

—Ilusiones intervencionistas, que confían en que la presión de naciones extranjeras hará lo que no puede hacer la presión interna.

—Ilusiones voluntaristas, que plantean proyectos políticos quiméricos, que sueñan con la unión de todos los hombres de buena voluntad en un pacto social cuya amplitud es la exacta medida de su irrealidad.

Ciertamente, todas y cada una de estas ilusiones tienen componentes falsos y también dosis de verdad y de necesidad parcial. La función de una política válida es deshechar a los primeros e inscribir los elementos valiosos en un programa coherente de acción. Pero nada de eso tiene sentido si no existe un movimiento humano poderoso, de profundas convicciones democráticas, al que anime un sentido de causa, de servicio y una vocación superior.

Es, pues, necesario desarrollar e impulsar una práctica de anticipación democrática, en donde aun en los momentos de peor adversidad existan hombres y un movimiento que con su presencia estén garantizando la emergencia de la nueva democracia que postulamos.

En tal sentido valoramos extraordinariamente la respuesta personal: el testimonio de vida. La conducta pública que dice no a la injusticia y a la mentira, venta de quien venga. Tarde o temprano ella desnuda y destruye el error y la maldad. Nadie podrá detener a un movimiento al que animen testimonios personales de valor y de grandeza.

Pero lo anterior no es suficiente. Es necesario, además, una respuesta social, aquella que surge de una teoría y se vive en una organización. Tal es nuestra tarea y la del movimiento democrático de que formamos parte. Nos corresponde mostrar en el sacrificio de nuestra acción la validez de los principios que nos sustentan. Enfatizar que en nuestra acción política los medios y los fines están unidos. Que en nuestra vida interna está presente la convicción de que la democracia que surja no será mejor ni peor que la conducta de hoy de los demócratas. La nueva democracia no tendrá nada nuevo en su espíritu que ya no haya estado en la luz y el sacrificio de los que la posibilitaron.

II.— PROPOSICIONES QUE DEFINEN EL CAMINO POLITICO DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA.

A diferencia de las cuatro primeras proposiciones, que son de carácter general, las siguientes diez tesis se refieren específicamente a nuestro camino político, procurando definirlo con la mejor precisión, de modo que no quepan respecto de él dudas ni pueda

prestarse para la creación de confusiones interesadas.

En primer lugar establecemos el principio rector de la estrategia, que es una definición de la democracia (proposición V); seguidamente describimos someramente las fases tácticas, que son tres: de la denuncia y el testimonio, de la persuasión y de la construcción de la plataforma gubernamental (proposición VI).

A continuación precisamos con claridad aquellos grupos que, en razón de profundas diferencias excluimos de una alianza política y de un programa de gobierno común. Tales son la derecha fascista o neofascista (proposición VII). A la vez definimos nuestra política como independiente y ajena de los sectores de la Unidad Popular (proposición IX). Respecto de la derecha política tradicional, conjuntamente con denunciar la masiva y abyecta deserción que ha hecho a sus tradiciones e ideales, planteamos la necesidad del surgimiento de nuevos grupos conservadores (proposición XI).

Como base fundamental de un camino para Chile planteamos (proposición XII) la unión de los humanistas en un movimiento mucho más amplio que la Democracia Cristiana y que se nutre con hombres provenientes de otras creencias y tradiciones que las nuestras. Esa unión debe hacerse en torno de un gran proyecto histórico del que se definen sólo sus parámetros más esenciales. Y que considere como elemento fundamental la autonomía y el fortalecimiento de las organizaciones del pueblo. En ese marco se postula como fundamental la ruptura del aislamiento de los militares y la civilidad (proposición XIII). Finalmente se señala a la renovación de los partidos políticos como una de las grandes exigencias de la democratización (proposición XIV).

QUINTA PROPOSICION: UNA DEFINICION DE LA DEMOCRACIA COMO PRINCIPIO RECTOR DE LA ESTRATEGIA

Definimos como principio rector de nuestra estrategia la obtención de una forma de gobierno que comprenda las siguientes dimensiones específicas:

—Legitimidad democrática, cuya traducción es el gobierno de las mayorías a través de elecciones.

—Participación de las decisiones y por consiguiente, apropiación relativa igualitaria en los beneficios del sistema.

—Autonomía social o, si se prefiere, respeto por los pluralismos doctrinarios y sociales.

—Adecuada protección de los derechos del hombre, cualquiera sea su credo, opinión política o función económica, frente a atropellos provenientes de actos del gobierno u originados en el abuso de la libertad por parte de grupos que acuden a la violencia o a otras formas de destrucción de la convivencia.

La nueva democracia que se postula no alienta ningún exclusivismo ideológico, doctrinario ni utópico. Ello no significa renunciar a los propios principios, sino comprender la política como una búsqueda de una convivencia verdadera. Tampoco una democracia abierta puede ser entendida como un sistema político desarmado frente al desorden, la violencia y las distintas formas de atropello y destrucción de la convivencia social y política. La destrucción de la democracia chilena tiene por una de sus causas principales la propia debilidad de los demócratas, que a lo largo de las últimas décadas toleraron, cuando no ampararon, conductas antisociales que finalmente terminaron siendo factores decisivos en el quebrantamiento del sistema político, como ser "las tomas", huelgas ilegales, el periodismo amarillero, etc. Un nuevo orden institucional democrático debe prevenir adecuadamente este tipo de conductas desviadas.

Como se ha dicho, la obtención de esas metas es un proceso gradual, objetivo y dinámico.

La definición del principio fundamental de la estrategia precisa tanto las dimensiones reales de la democracia anhelada como las formas incompletas que puedan irse obteniendo en el proceso de transición. Del mismo modo, permite distinguir en la práctica el tipo de alianza política que se persigue.

En efecto, la definición de la propia identidad establece las afinidades y las alianzas posibles. Es afín aquel que compartiendo la teoría democrática realiza el trayecto para conquistar juntos la práctica democrática. De hecho nuestra afinidad más próxima será con los demócratas de avanzada que postulan una democracia social donde todas las estructuras de la vida chilena se orienten a sostener el ejercicio de derecho y libertades reales.

Con todo, el camino está abierto a la persuasión democrática.

SEXTA PROPOSICION: LAS FASE TACTICAS DE LA ESTRATEGIA

Para la consecución del objetivo estratégico que hemos descrito se proponen tres fases tácticas. Ellas deben ser entendidas como énfasis en el tipo de acciones a realizar. Debe descartarse el esquematismo de suponerlas mecánicas o estrictamente sucesivas. Las fases propuestas son las siguientes:

—de la denuncia y el testimonio;

—de la persuasión democrática, y

—de la construcción de la plataforma gubernamental.

La primera fase la hemos llamado de la denuncia y el testimonio. Su objetivo es madurar la opinión pública acerca de la dictadura. Para ello se perfilan tres políticas inmediatas, hasta ahora rudimentariamente realizadas.

a) Política de formulaciones críticas. Aquí la denuncia y el testimonio se expresan en la acción resuelta de los dirigentes y militantes que actúan en la defensa de los derechos humanos, en la crítica a la política económica, en la protección del sindicalismo y los pobladores y en la lucha ideológica y cultural.

b) La segunda es la difusión de planteamientos fundamentales, en el plano económico, internacional y de reforma constitucional.

c) La tercera es la política de solidaridad concreta con los perseguidos,

cesantes, expulsados, discriminados y exiliados. Es el terreno natural de la persuasión por el testimonio ejemplarizador.

Todas las acciones de esta fase tienen en común la necesidad de ser conocidas y públicas. Debemos mejorar la difusión de nuestras opiniones y procurar ganar la mayor adhesión para ellas. Una política realista en estas materias debe actuar sobre el supuesto —por lo demás comprobado una y mil veces en la experiencia histórica de que una de las principales limitaciones al abuso de la fuerza por parte de las dictaduras la constituye una opinión pública nacional e internacional bien informada.

La segunda fase la hemos denominado de persuasión y deberá extenderse a todos los sectores de la vida chilena, partiendo por aquellos cuya opinión, fuerza o decisión sean más importantes para el futuro de Chile.

La tercera fase es de construcción de una plataforma gubernamental y, por consiguiente, lo central en ella son las relaciones con otras fuerzas políticas. Tales relaciones se analizan en las siguientes proposiciones.

SEPTIMA PROPOSICION: RECHAZO ABSOLUTO A LOS GRUPOS DE TENDENCIA FASCISTA

El Partido rechaza cualquier proyecto fascista para Chile. Con ello no hace sino continuar una de sus tradiciones más esenciales. A lo largo de cuarenta años hemos luchado sistemáticamente contra todo tipo de fascismo, declarado o encubierto.

Rechazamos igualmente los intentos de institucionalización de un neofascismo que, cualesquiera sean sus perspectivas de crecimiento económico, instituya la desigualdad como criterio social y la atrofia de la vida cívica como modo de relación entre los ciudadanos.

OCTAVA PROPOSICION: RECHAZO ABSOLUTO A LOS GRUPOS DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA PARTIDARIOS DE LA VIA ARMADA

Rechazamos del modo más terminante las políticas de izquierda revolucionaria fundadas en la violencia como medio de acción.

Nuestra convicción democrática es enteramente antagónica a las fórmulas guerreras de sectores de izquierda que ven la revolución como el resultado de una victoria militar, con absoluto desprecio por las opiniones mayoritarias del pueblo. Lo es más aún con grupos que hacen del terror y el asesinato instrumentos de su acción política.

Rechazamos con el mayor énfasis la práctica de esos grupos y denunciamos su carácter provocador. La historia reciente de América Latina muestra que la violencia revolucionaria ha sido la mayor contribución al ascenso de las fuerzas más retardatarias del continente; una de las causas más importantes en la instauración de regímenes autoritarios y despóticos, la justificación o el pretexto para el hiperdesarrollo de los aparatos policiales, y una de las causas fundamentales en el fracaso de importantes proyectos de cambio social.

Con respecto de estos grupos, al igual que con aquellos de inspiración fascista, mantendremos una actitud de rechazo sistemático a todo contacto o relación de convergencia, salvo aquellas que surjan con individuos concretos para la defensa de sus prerrogativas de persona humana.

NOVENA PROPOSICION: NUESTRA POLITICA ES INDEPENDIENTE Y AJENA A LOS AVATARES DE LA UNIDAD POPULAR

No afirmamos ni negamos la actual existencia de la Unidad Popular como combinación política. En efecto, no sabemos nada verdadero y global de sus conflictos, debates o experiencias. Sólo es verosímil respecto de ella formular la hipótesis de que en su interior hay diferentes orientaciones, nuevos líderes, distintas experiencias y muy diversos grados de autocrítica.

No pretendemos dividir ni unificar a la Unidad Popular. Aún más, no sería realista de nuestra parte proponernos tales objetivos respecto de ese conglomerado, pues no obtendríamos, como consecuencia de nuestra acción, resultados o logros verdaderos. La política democratacristiana es, pues, independiente y ajena a los avatares de esa agrupación política.

En general, nuestra relación con los grupos y personas que apoyaron al Gobierno de Salvador Allende debe estar caracterizada por la persuasión a partir de nuestros propios valores. Procurar exigirles que como mínimo aquello que debemos demandarnos a nosotros mismos: aprender la lección. Es necesaria una valoración más realista de la democracia política, pues ella importa conquistas valiosas de la Humanidad que ciertamente es necesario perfeccionar, pero que no es legítimo suspender ni arriesgar de modo irresponsable en nombre de una redención social lejana e ilusoria. Es necesario comprender la fragilidad de la democracia política y aceptar que su crítica despiadada y el abuso de sus instituciones puede conducir al término de los derechos políticos de los ciudadanos y con ello el agravamiento de la situación de los oprimidos. Hay que aceptar que los derechos humanos son una necesidad universal y no un elemento que es posible valorar tácticamente en una política que los invoque y demande en las luchas contra las dictaduras de derecha, que los considere de manera puramente instrumental bajo las democracias liberales y que los niegue de modo implacable en la vida interna de las organizaciones revolucionarias y en las formas de gobierno a que da lugar la revolución cuando es exitosa.

Es obvio que la persuasión no puede hacerse sobre la base de exigencias que impliquen una abjuración total a la propia concepción del mundo.

No obstante, un debate y una confrontación generosos en torno de temas como los que hemos señalado creemos que puede conducir a importantes cambios en los programas y la práctica política, de manera de garantizar en las

ideas y en los hechos una adhesión sincera y responsable a los ideales democráticos.

Finalmente, partiendo por el reconocimiento de la multiplicidad del exilio y de la heterogeneidad de los grupos existentes en el territorio nacional, creemos que sólo nos cabe actuar frente a conductas políticas del presente que sean visibles y objetivas.

DECIMA PROPOSICION: UNA CONSIDERACION RACIONAL DEL PROBLEMA COMUNISTA

El problema comunista tiene en estos momentos en el país una importancia desusada. Ello es el resultado, por una parte, de que el gobierno haya puesto en el centro de su discurso ideológico y de su acción propagandística el problema del anticomunismo y, por otro lado, de la propia acción de algunos grupos de izquierda que, con una óptica errada, debaten el tema de los derechos políticos del Partido Comunista como si fuera el primer problema que hubiera que resolver en el tiempo, y a la vez, el de importancia principal.

Es por esas razones que creemos conveniente —además de las consideraciones contenidas en la proposición anterior y que de modo general condicionan nuestra acción frente a la izquierda tradicional chilena— formular de manera detallada los criterios que inspirarán la acción de la Democracia Cristiana frente a los comunistas.

Frente al Partido Comunista se dan en Chile en la actualidad dos enfoques que la Democracia Cristiana considera profundamente erróneos.

1. La de la cruzada anticomunista: Tal posición parte por sostener que el marxismo es, en el sentido más propio, una perversión. El significado de esa afirmación es que el marxismo no es una doctrina errada sino diabólica, en cuanto todo lo que de ella emana, así se presentó bajo una apariencia benévola, está marcada por un propósito repugnante e inaceptable. Para esta concepción "el comunista" es la negación misma de la idea de nacionalidad y, consecuentemente, ésta sólo es concebida como un mundo sin comunistas. Así, el comunismo es definido como un enemigo absoluto. Esta visión que hace de la lucha política una verdadera guerra de religión termina por considerarse como "traidor" a cualquier persona o elemento que no comparte esta definición maniquea y atroz de la lucha anticomunista. El que no está dispuesto a sumarse a la "cruzada" contra el comunismo es tenido, al margen de sus intenciones, ideas o tradiciones, como un agente objetivo de esta ideología diabólica y, en definitiva, por esta sospecha, excluido de la posibilidad de cualquier debate o compromiso político.

Esta posición la rechazamos en razón de nuestras convicciones ideológicas, políticas y morales. Digamos, además, que esta visión del comunismo no la sostienen las naciones líderes del mundo capitalista ni tampoco regímenes militares fuertemente empeñados en la lucha antisubversiva como los de Argentina y Brasil.

2. La asimilación de comunismo y lucha por la justicia social: Este es un viejo sofisma de los sectores más reaccionarios del país. Primero practican una política de egoísmo ciego y luego tildan la legítima defensa de los sectores postergados y explotados como parte de un complot comunista.

Para los cristianos —y en general para todos los hombres honrados— la paz sólo puede ser obra de la justicia. Pretender que la reivindicación social y económica es sinónimo de comunismo es hacerle un favor al comunismo y encubrir las peores formas de explotación y egoísmo bajo banderas ideológicas.

A la vista está esa experiencia en la historia reciente de los chilenos. Hasta el día de hoy, sectores ultrareaccionarios en nombre del anticomunismo ocultan su política de retorno a los privilegios del pasado y destruyen las formas de participación y los valores por los cuales luchó y se movilizó el pueblo en contra del régimen de la Unidad Popular.

Quienes así piensan, en su ceguera, no perciben de qué manera sus posiciones políticas no hacen más que probar, a los ojos del pueblo, las tesis más burdas del marxismo vulgar. Denunciar la dramática situación que sufren los chilenos de hoy es una obligación que ninguno de nuestros militantes puede eludir. Forma parte de su obligación política.

Rechazamos las dos posiciones anteriores frente al problema comunista. La línea de la Democracia Cristiana sobre esta materia está caracterizada por los siguientes principios fundamentales:

1.— Es imposible desconocer el hecho del comunismo. En el mundo actual, gobiernos comunistas ocupan más de un tercio de la superficie del planeta y de su riqueza. Parte importante de la población del mundo vive —a gusto o disgusto— bajo regímenes comunistas y en el mundo no comunista ideologías y organizaciones de esa inspiración tienen importante influencia.

2.— Es imposible igualmente desconocer que el mundo comunista es variado y diverso y está sujeto a fuertes contradicciones internas. Este hecho evidente destruye uno de los supuestos básicos de la política de ultraderecha, que es la visión de un comunismo monolítico e impermeable a cualquier revisión crítica. Por el contrario, en ese movimiento existen fuertes pugnas entre naciones (Rusia y China en el límite de mayor agresividad); (Rusia y Yugoslavia en menor medida); apreciables diferencias nacionales, aun entre regímenes que se ubican bajo el control del Pacto de Varsovia; profundas diferencias ideológicas y programáticas entre el Partido Soviético y algunos de los principales partidos de Occidente (fenómeno del euro-comunismo; de desarrollo incipiente pero interesante); y del interior del sistema comunista un fuerte movimiento disidente de influencia siempre creciente, cuyas acciones de valor y de protesta conmueven profundamente a la humanidad de dentro y de fuera del mundo comunista.

Esta diversidad del comunismo, que debiera alentar una política pragmática, no ha podido ser desconocida ni por la propia Junta Militar Chilena, que

a pesar de su intransigencia ideológica, mantiene relaciones diplomáticas con China Comunista y ha rendido desusados homenajes frente al fallecimiento de Mao Tse Tung, autor de lo que, en el lenguaje de la derecha, debiera ser considerado una de las revisiones más "intrínsecamente perversas" del marxismo. Obviamente no es posible centrar esperanzas desusadas en los efectos de divisiones y contradicciones del comunismo, pero es preciso reconocer que ellas han posibilitado mucho más el camino hacia los valores de la civilización cristiana occidental que las guerras anticomunistas, las que por el contrario sólo han significado hasta ahora derrotas para sus impulsores.

3.— El reconocimiento del hecho histórico del comunismo no significa, por supuesto, debilitamiento alguno de la posición política de la Democracia Cristiana que es incompatible con el colectivismo totalitario y antagónico con su política. Además, afirmamos que no existe otra forma de contrarrestar la influencia comunista que la lucha ideológica y la implementación de políticas que, en los hechos, demuestran ser superiores a aquellas que aplican las naciones comunistas. Es por ello que el Partido, bajo ningún respecto, cejará en su lucha ideológica, que no sólo consiste en la propagación de sus principios y valores, sino también en la confrontación con las demás ideologías.

4.— El Partido Comunista chileno — conocido por su obscuro docilidad a las directrices emanadas del Partido Comunista soviético — sostiene concepciones programáticas y una práctica política que resultan incompatibles con la Democracia Cristiana, especialmente las siguientes:

— Una concepción unilateral frente al problema de los derechos humanos que le lleva a condenar duramente las violaciones que respecto de ellos se cometan en las naciones capitalistas y a guardar complicidad y silencio respecto de aquellas que ocurren en el mundo comunista.

— La afirmación de "la dictadura del proletariado" como ley fundamental de la transición al socialismo. Este sistema político, como es sabido, se caracteriza por el establecimiento de la dictadura del Partido Comunista sobre la sociedad. Por la desaparición de todo pluralismo político e ideológico. Por la destrucción de la autonomía de los cuerpos sociales intermedios — sindicatos, gremios, municipios, organizaciones vecinales, etc. — respecto del Partido. Por la hostilidad, cuando no la persecución, de las Iglesias. Por el control policial de la cultura en sus más variadas expresiones. Por el hiperdesarrollo de la policía política y los servicios de seguridad del Estado.

— Una concepción del cambio social que no lo hace depender del apoyo de las mayorías sino de la voluntad del Partido, erigido como única vanguardia del proletariado. De aquí deriva una concepción oportunista de la violencia, pues la revolución que propugnan puede ser — y de hecho siempre ha sido hasta ahora — la imposición al pueblo por la fuerza de un modelo de revolución sobre el que no se le ha consultado y que tampoco puede revisarse o revocarse.

Son estas incompatibilidades — y no consideraciones subjetivas — las que hacen imposible la formulación de un proyecto histórico común de la Democracia Cristiana y los comunistas. Dicho más claramente, la Democracia Cristiana rechaza una alianza o programa de gobierno con el Partido Comunista chileno.

DECIMOPRIMERA PROPOSICION: NUEVOS GRUPOS CONSERVADORES DEBEN SURGIR TRAS LA DESCRUCION DEMOCRATICA DE LA DERECHA TRADICIONAL

La democracia en Chile estaba, en alguna medida, asociada a la obra y las convicciones de los grupos de derecha, ya fueran de origen liberal o conservador. La historia republicana muestra en otras épocas a innumerables hombres de esa filiación como leales defensores del progreso democrático y de la Constitución Política del Estado. Los intentos autoritarios, autocráticos o dictatoriales del pasado encontraron oposición en grupos amplios y representativos de ese sector del espectro político.

Después del 11 de Septiembre de 1973, la dirigencia política de la vieja derecha conservadora — liberal ha hecho una abyección y masiva traición a sus tradiciones y a sus valores más esenciales. Capitaneados por oportunistas de los más diversos pelajes y por sectores nacionalistas, neo-fascistas e integristas católicos, ha apoyado al Gobierno sin reservas, ha luchado por proyectarlo indefinidamente y ha guardado complicidad y silencio frente al terror policial. Del mismo modo, ha mostrado un deseo irracional de venganza y revancha social, que le ha llevado a intentar una monstruosa contrarrevolución que procure volver al país a una situación anterior a la primera administración del Presidente Arturo Alessandri Palma, en 1920, mutilando el movimiento social, deshaciendo las reformas y conquistas de las mayorías y restableciendo la prepotencia y la arbitrariedad como normas de convivencia.

La derecha chilena de estos años ha obrado como si se hubiera propuesto, de modo deliberado, demostrar en su caso que son ciertas las generalizaciones del marxismo vulgar, de que principios respetables que ella invoca son sólo la fachada tras la que se esconden los más egoístas intereses económicos y financieros. Particularmente repugnante resulta esta situación en el caso de Chile, si se tiene en consideración que la oposición al experimento de la Unidad Popular se hizo en nombre de valores, principios y comportamientos libertarios y constitucionales y nunca en nombre de mezquinos intereses económicos.

Una situación de esta naturaleza representa un serio desafío para la reconstrucción democrática.

No es posible concebir un país en el cual no existan grupos conservadores y en consecuencia movimientos políticos que los representen.

Pero una democracia renovada en nuestro país requiere del surgimiento de nuevos grupos conservadores y liberales capaces de romper con el grosero maquiavelismo que ha demostrado masivamente la derecha tradicional. Múltiples facetas de la historia de Chile, en sí mismas, representan un valioso patrimonio que pueden reivindicar dichos grupos emergentes para sustentar una posición en la construcción de una nueva democracia.

DECIMOSEGUNDA PROPOSICION: LA UNION DE LOS HUMANISTAS Y UN MOVIMIENTO SOCIAL FUERTE Y AUTONOMO COMO BASES FUNDAMENTALES DE UN GRAN PROYECTO PARA CHILE

Las tareas políticas previsibles para el futuro son enormes. Pretender que ellas pueden ser la sola obra de la Democracia Cristiana es imposible. Es, pues, necesario crear una alianza política con sectores mucho más amplios que el Partido y que llegue a abarcar una clara mayoría del país. Ciertamente esto no es ni ha sido una tarea fácil. Históricamente una de nuestras más graves fallas la ha constituido la incapacidad para formar alianzas con grupos significativos. Por otra parte, la historia reciente del país ha quebrado peligrosamente a la sociedad chilena dividiéndola en sectores que no son fáciles de reconciliar.

Cualesquiera sean las dificultades, la constitución de una gran alianza política es una tarea irrenunciable y un requisito esencial para superar la crisis. Encontrar la forma para romper los marcos partidarios y pasar a formar parte de un vasto movimiento que nos supere en apoyo y fuerza, y que se robustezca por la plena participación de miles de personas de calidad provenientes de otros grupos, es probablemente la más importante tarea de esta hora.

Pero una alianza política no puede ser una masa amorfa compuesta de la suma meramente aritmética de movimientos políticos enormemente variados, con tácticas, estrategias y programas antagónicos y cuya constitución el país pueda percibir como el fruto de maniobras hechas con vistas a la capacitación de posiciones en el aparato del Estado o el reparto del movimiento social. No, lo que tenemos que crear es un movimiento que exprese una misma convicción política y moral, porque sólo así podrá llegar a ser la columna vertebral para un gobierno eficaz, disciplinado, fuerte y respetado.

En partes de este documento hemos señalado aquellos con quienes no podemos constituir esa alianza. Con lo anterior estamos diciendo que cuando hablamos de un gran movimiento para Chile no nos mueve un puro espíritu ecléctico, que está abierto a todas las fórmulas y programas concebibles en el país.

No es así. Nuestra acción política se realiza a partir de una doctrina que no es dogmática pero que está marcada por ciertos principios que estimamos valores irrenunciables. No obstante, ellos son lo suficientemente abiertos como para que no sean obstáculos a acuerdos amplios y generosos con sectores mucho más numerosos que la Democracia Cristiana; con hombres de diversas creencias que las nuestras y provenientes de otras tradiciones.

Planteamos concretamente, como tarea principal de esta hora, lograr la más amplia unión de los humanistas, de diversos horizontes ideológicos, con el objeto de ir construyendo un programa político centrado en los siguientes parámetros esenciales:

- 1) Los derechos humanos como un valor universal.
- 2) La tendencia a la igualdad y la justa distribución del producto económico.
- 3) La democracia política.
- 4) El pluralismo ideológico y social.

Porque anhelamos fervientemente esta unidad es que hemos rechazado la idea, tan común en los documentos políticos, de partir por la definición en abstracto de un modelo de sociedad que es presentado como un proyecto acabado y difícilmente revisable. La Democracia Cristiana no propone un modelo de nueva sociedad elaborado entre las cuatro paredes de un gabinete de trabajo. De esta manera queremos contribuir a evitar un debate "ideologizado", en el cual las utopías lejanas impidan un camino común en el presente. Queremos decir también con ello que rechazamos todo mesianismo y cualquier pretensión de hegemonía odiosa e inútil.

Creemos que hoy día en Chile para nadie es fácil presentar un proyecto histórico acabado. El país ha padado a ser en el mundo — por obra de todos — el más gigantesco laboratorio de experiencias sociales, económicas y políticas. Hemos pasado de las recetas ortodoxas del socialismo al más extremo liberalismo. Del integrismo de la ultraderecha al integrismo de la ultraderecha. De la reforma agraria a la ocupación de los campos y luego a la contrarreforma agraria. Hemos hecho crecer el Estado hasta límites increíbles y luego lo hemos desmantelado. Desde 1970 hasta ahora, bajo el peso de políticas encontradas, los principales establecimientos económicos del país han cambiado tres veces de estatuto y dos o tres veces de propietarios.

No creemos, pues, que sea función de quienes quieran realmente reconstruir la democracia comenzar por ofrecer una nueva utopía para que suceda a la actual. Lo que debemos partir por buscar es restablecer un grado de concordia nacional, del cual el país ha carecido en los últimos siete años, y que permita un gran debate acerca del modelo social y la estrategia de desarrollo. La primera base sobre la que cimentar un programa real en estas materias es recoger la contribución de todos, aceptando que las verdades de las políticas económicas, sociales y culturales son relativas y parciales. El país tiene urgencia de realizar una reflexión serena de sus experiencias prácticas, analizar con espíritu crítico y abierto los planes, programas y políticas del pasado reciente y del presente.

Creemos que este nuevo proyecto debe partir por el pleno respeto al movimiento social en sus estamentos, sectores y organizaciones; a los sindicatos, los gremios y las organizaciones de los pobladores y los marginales, a las cooperativas, empresas de trabajadores, centros culturales, clubes deportivos, comedores populares, etcétera.

Estamos seguros que ese movimiento social quiere vivir en la concordia democrática. Por muy insuficiente que sean las libertades políticas, ellas garantizan la vida y la dignidad de los trabajadores. Sin democracia política tampoco hay organizaciones del pueblo: esa es una de las más duras enseñanzas de estos años. Los trabajadores desean la democracia como una forma de participación disciplinada en los beneficios y el producto social, tienen aversión al caos y a la anarquía porque han aprendido dramáticamente que de ellos son sus primeras y más seguras víctimas. Aspiran a desarrollar la autonomía, la calidad y la fuerza de sus organizaciones, como manera de ponerlas a salvo del populismo y de las irresponsables aventuras revolucionarias de las izquierdas desvariadas.

Afirmamos que la idea de nación es una gran mentira si no reconoce al movimiento social. No hay patria sin un movimiento social vivo y activo. No puede subsistir un sistema político que se funda en el aplastamiento de toda célula social que le sea independiente o ajena.

Hacer confianza en el movimiento social y en el desarrollo de sus organizaciones como contribución a un nuevo proyecto de sociedad es precisamente un acto de realismo. Sólo los chilenos pueden vivir de manera cosmopolita, de paso en Santiago, como podrían hacerlo en Buenos Aires, París, o Nueva York. La enorme mayoría de nuestros compatriotas no tiene más alternativa que construir aquí y ahora su propia morada. No pueden medrar de ninguna crisis y todas los afectan. Están obligados a convivir en esta tierra y a arrancar de ella el odio. Son una fuente de racionalidad política, distantes de los extremismos y que anhelan fervientemente un proyecto político fundado en valores humanistas para poner manos a la obra e iniciar la construcción de una morada para todos los chilenos, sin exclusiones.

Este gran proyecto social que postulamos supone de manera muy especial el surgimiento de una poderosa corriente renovadora capaz de hacer surgir en el espectro político chileno una nueva izquierda política.

Esa nueva izquierda no será el resultado de maniobras más o menos hábiles o encubiertas de la Democracia Cristiana. El país está cansado de un cierto maquiavelismo ingenuo, especialista en la creación de organismos de fachada. No buscamos eso. Anhelamos el surgimiento de un poderoso movimiento que sea el resultado de un proceso de maduración y toma de conciencia colectiva de importantes sectores de la izquierda tradicional chilena. Grupos que rompen con el pecado dogmatismo de las ortodoxias, hecho que parece posible en un mundo que discute arduamente este problema. Grupos de izquierda que asumen una posición sobre los derechos humanos que resulte de la experiencia vivida en Chile, y no de las conveniencias y silencios que imponga la dependencia del movimiento comunista pro-soviético. Una izquierda nueva que sea el fruto madurado de la experiencia histórica, y que en razón de ella, y no de conveniencias tácticas, sea capaz de valorar la democracia política y de romper de manera inequívoca con los partidarios de la violencia revolucionaria.

Creemos en la emergencia de este nuevo actor político porque su surgimiento satisficaría una necesidad muy real de Chile y de su pueblo.

DECIMOTERCERA PROPOSICION: UN NUEVO PROYECTO PARA CHILE REQUIERE ROMPER EL AISLAMIENTO DE LOS MILITARES Y LA CIVILIDAD

Creemos que uno de los errores políticos más graves que se han cometido en el país fue la creciente separación de los militares y de la civilidad durante todo el período que va desde 1932 a 1973. Fruto de circunstancias históricas y de una ceguera política, que no es del caso detallar aquí, estos dos mundos fueron escondidos en compartimentos estancos entre los que prácticamente no existieron relaciones de ningún orden. Por cierto, a la configuración de esta realidad han contribuido todos los grupos políticos y sociales, sin excepción, hecho que es importante de destacar en un momento en que una derecha económica oportunista se esmera en adular a la institución militar como medio para impulsar una determinada política económica y de revancha social.

Esta circunstancia, lejos de haber sido remedida en el período 1973—1976 ha resultado peligrosamente agravada. Al respecto, es posible distinguir dos etapas perfectamente diferenciadas. Una primera, en que el gobierno fue casi enteramente militar, y otra segunda, en que se ha ido institucionalizando una dictadura personalista, que es sostenida por las Fuerzas Armadas pero sin que éstas ejerzan control alguno sobre el gobierno y sus políticas. La historia demuestra que este tipo de regímenes conduce a las peores formas de aislamiento de los militares respecto de la civilidad, confinándolos a la condición de meros sostenedores armados de un poder que les es ajeno.

No es posible un nuevo sistema político ni una fórmula satisfactoria de gobierno si los chilenos no somos capaces de romper este aislamiento entre el mundo militar y el civil.

La superación de la actual crisis no se hará sobre la base de una consigna tan simple como engañoso del retorno de los militares a los cuarteles, sea para apoyar desde ahí un gobierno democrático o para sostener una dictadura personal.

Toda política realista sobre la materia debe partir por reconocer a los militares un importante papel en la gran política del Estado. De ellos debemos esperar un aporte permanente a la elaboración y ejecución de los planes

de desarrollo económico, social, científico y tecnológico. Determinar las formas de esa participación y el papel de las Fuerzas Armadas en un nuevo proyecto de sociedad es una de las grandes tareas que plantea el futuro inmediato a todos los chilenos, sin excepción. Resolver ese dilema en una forma satisfactoria es la base fundamental sobre la que exigir un sistema político estable. A él debemos contribuir con lo mejor de nuestra capacidad política e intelectual y en una actitud abierta que no tenga otra motivación que el interés superior de la Patria.

Naturalmente, la tarea más específica de las Fuerzas Armadas está vinculada a la seguridad nacional. Sobre esta materia es necesario un debate en profundidad, pues la seguridad nacional es invocada por sectores de derecha como un modo de justificar un totalitarismo de nuevo cuño. Para esos grupos seguridad nacional y antidemocracia son sinónimos. Claramente puede haber una concepción sobre esta materia que se funda en la idea de una dictadura económica, política y cultural. Pero esa idea es enteramente incompatible con nuestras tradiciones, con el nivel de nuestro desarrollo político y social, y con nuestra situación en el mundo. Dicho de otra manera, semejante concepción nos conduce a un conflicto social y político permanente y al aislamiento en el mundo internacional. Chile, pues, está obligado a mirar su seguridad nacional en la perspectiva de las grandes naciones de Occidente, donde el poder militar se desarrolla a pares con una convivencia política centrada en la democracia y en los valores del Humanismo.

Seguridad nacional y democracia, seguridad nacional y auténtico humanismo no son valores antagónicos, del mismo modo como ejército y civilidad no son elementos contrapuestos sino partes de un país que hay que sumar y multiplicar.

DECIMOCUARTA PROPOSICION: LA RENOVACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS ES UNA DE LAS GRANDES EXIGENCIAS DE LA DEMOCRATIZACION

El gobierno ha tenido un relativo éxito en su intento de despertar y canalizar resentimientos en contra de los políticos y los partidos.

Por tanto, es una tarea primordial del presente reconquistar la confianza pública en los partidos políticos como instrumentos democráticos de reconstrucción nacional.

Si una renovación política profunda no se vislumbra con claridad que la masa influyente y movilizable del país deje de optar por un mal conocimiento antes que uno por conocer.

Sin embargo, este no es un empeño fácil que dependa de una buena publicidad o que pueda quedar entregado a la ilusoria confianza de que el prestigio de los partidos políticos mejorará en la misma medida en que la crisis del Gobierno se acentúa. Encarar este problema implica actitudes y decisiones de fondo.

La manera de hacer política en Chile debe ser revisada y con una honestidad tan perceptible que el país encuentre síntomas evidentes de que los riesgos que teme no tienen asidero real.

Cambiar el estilo de hacer política debe ser un esfuerzo paralelo y simultáneo a la formulación definitiva de un gran proyecto histórico para el país. Lo uno sin lo otro de nada sirve. Un partido muy bien estructurado, pero que carece de proyecto, es algo vacío; un gran proyecto, sin un grupo humano que garantice la viabilidad de su puesta en marcha, es una nueva utopía.

Por esta razón, no tiene sentido el debate acerca de qué es primero: el partido o el proyecto histórico. Ambas tareas son simultáneas: ir formulando un programa para el país e ir formando un instrumento partidario sólido, eficiente y disciplinado, capaz de inspirar confianza moral y política al pueblo chileno.

III. PROPOSICIONES SOBRE LA ORGANIZACION Y LA VIDA INTERNA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

La renovación partidaria a que se alude en la proposición anterior alcanza a todas las agrupaciones políticas chilenas y, por supuesto, también a la Democracia Cristiana, que vive, no menos que el resto del país, una crisis muy grave que es imperioso remediar. Las dos tesis siguientes se refieren a la organización y a la vida interna de la Democracia Cristiana y a los criterios que deben orientarla.

Una se refiere a la necesidad de una revisión crítica de nuestro pasado y los criterios que deben presidirla (proposición décimoquinta) y la siguiente a algunos criterios para el funcionamiento de una organización democrática, moderna, disciplinada y eficaz (proposición décimosexta).

DECIMOQUINTA PROPOSICION: LA NECESIDAD DE UNA REVISION CRITICA DE NUESTRO PASADO Y LOS CRITERIOS QUE DEBEN PRESIDIRLA

No es posible pretender superar la crisis actual, reconstruir el sistema político y rectificar nuestro Partido si no somos capaces de revisar críticamente el pasado del país y de nuestra organización, especialmente su período reciente.

No hay ningún sector, clase, élite social, militar o política que no haya contribuido de algún modo a la actual encrucijada chilena; sólo grupos o dirigentes moralmente pequeños o inmaduros podrían pretender que están excluidos de culpa en el fracaso.

La Democracia Cristiana necesita, no menos que otros, hacer ella misma una crítica de su propio pasado y de aquella parte de la historia del país en que ha sido un actor político principal. Debe hacerlo en interés del país y de otros aquello que no nos exigimos practicar por nosotros mismos.

Para que esa autocrítica sea fructífera y útil a nuestra organización, creemos que debe estar presidida por tres principios fundamentales: globalidad, objetividad e identidad.

Globalidad, en cuanto debe abarcar, primero, a las relaciones políticas y sociales completas, y segundo a un período de tiempo significativo. En efecto, la Democracia Cristiana no es el único actor de la realidad chilena, de

modo que su acción se da en el marco de un campo de fuerzas políticas y sociales encontradas que arrojan un resultado determinado en el que nosotros tenemos una responsabilidad, pero no exclusiva ni siempre principal. Por otra parte, los hechos políticos, especialmente los importantes, se gestan en un período largo, de modo que no resulta equívoco juzgar sus resultados finales si no somos capaces de remontarnos a sus antecedentes, que casi siempre suelen ser los decisivos.

Objetividad, porque los juicios deben probarse en hechos y no en apreciaciones o suposiciones de intenciones. En otro sentido, objetividad alude a la necesidad de evitar la personalización de los procesos sociales, pues los hechos políticamente importantes no dependen de actos personales, sino de factores mucho más complejos.

El principio de identidad se refiere a que el padrón de análisis para la crítica son los valores del Partido. De lo que se trata es enjuiciar la política democrática cristiana en cuanto ella haya servido o no a los valores que invoca.

DECIMOSEXTA PROPOSICION: ALGUNOS CRITERIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA ORGANIZACION DEMOCRATICA MODERNA Y EFICAZ

Es de nuestra esencia la existencia de corrientes y diversas opiniones. Ese hecho no puede ser combatido bajo ningún aspecto, pues equivaldría a destruir, en nuestra propia vida interna, aquellos valores que decimos sustentar y que hoy alientan no tan sólo nuestra lucha, sino también nuestra esperanza de un Chile mejor.

Pero debemos ser capaces, también, de compatibilizar este hecho altamente positivo con la aspiración de una organización democrática moderna, disciplinada y eficaz. El problema, ciertamente no es nuevo, y su solución, aunque no fácil, es enteramente posible. Al respecto, creemos que bastará tener presente en nuestra vida interna los siguientes criterios esenciales:

a) discusión y decisión impersonal y objetiva. Tal vez ésta sea una de las enfermedades que hoy más dificulta la vida partidaria. El debate al interior del Partido se ha ido dificultando por la presencia de una alta dosis de subjetivismo y por la importancia que han ido cobrando posiciones personales. Hoy, importantes problemas se ventilan en un clima enrarecido de suposición de intenciones y de etiquetas. Es indispensable superar esta situación. Hay que lograr una discusión impersonal que excluya al máximo posible los subjetivismo y las pasiones. Es necesario que nuestras diferencias pasen a expresarse en criterios racionales, claros y definidos, susceptibles de una discusión elevada. Sólo así se estará abriendo paso a la adopción de decisiones suficientemente categóricas basadas en consideraciones auténticamente políticas y no personales.

b) el derecho de la minoría: controlar, pero no obstruir. Una organización democrática supone casi de modo inevitable la existencia de mayorías y de minorías. En ella la mayoría no sólo tiene el derecho, sino el deber de decidir, pero la minoría tiene derechos que no pueden ser atropellados ni suspenidos. La minoría tiene el derecho a una información plena sobre cuanto ocurre en la organización. La información debe ser, además, en el sentido que le sea entregada en forma que ella pueda representar y defender sus posiciones con anterioridad a la adopción de las resoluciones. Pero el pleno respecto a los derechos de la minoría no puede ser el pretexto para la constante dilación de las resoluciones. Una organización democrática dinámica y eficaz debe ser capaz de garantizar escrupulosamente ambos valores: el respeto a la minoría y la adopción en tiempo de acuerdos y resoluciones.

c) conciencia de la línea. — Por ello entendemos la necesidad de que todos tengan una comprensión cabal de los supuestos políticos y de los objetivos del Partido.

d) coraje individual y colectivo. — La acción política es, antes que nada, una acción humana que requiere coraje y con mayor razón en la adversidad. No hay sustituto para el coraje. No sirven las palabras privadas cuando la ocasión social es la conducta pública y visible. Particularmente para los dirigentes, con una línea como la actual, dirigir es correr riesgos, más aún, estar a la cabeza de los riesgos que deben correr todos aquellos que desean ser reconocidos como militantes.

e) consulta amplia. — El partido debe desarrollar una organización donde los militantes y dirigentes que han asumido los riesgos de la acción sean permanentemente consultados acerca de los pasos sucesivos del Partido. Dicho de otra manera, y en forma más directa, en los dirigentes y militantes de manera orgánica descansa la voluntad del Partido.

SANTIAGO, DICIEMBRE DE 1976.

TOMAS REYES

NUESTRA FUERZA POLITICA Y SOCIAL AL SERVICIO DE LA RECUPERACION DEMOCRATICA Y EN DEFENSA DE LA JUSTICIA

Hemos creído conveniente iacer llegar a nuestros camaradas y amigos nuestro juicio sobre la situación del país y sobre el papel que corresponde al Partido Demócrata Cristiano en la recuperación de nuestra vida democrática, que ha sufrido tantas alternavas en esta década.

La democracia es para nosotros el sistema político en el cual el hombre se realiza más plenamente. Todo lo que se haga por robustecerla es positivo: todo lo que la limite o envelezca termina por construir en la sociedad valores que son esenciales para el hombre, aunque éste alcance el progreso que la técnica moderna pueda proporcionarle. Las experiencias de nuestro tiempo, vividas dolorosamente por gran parte de la

LOS DOCUMENTOS SECRETOS DE LA DC

humanidad, confirman esta apreciación.

Transcurridos más de tres años desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, supuesto el desarrollo normal de nuestra vida cívica, ya debiera haberse efectuado la elección de un nuevo Presidente de la República, acto el más trascendental de nuestra democracia.

Nostalgia inútil, se dirá, porque previamente una crisis del sistema había agotado las respuestas que el pueblo de Chile requería. En efecto, la institucionalidad había llegado a ser inadecuada por formal e ineficiente y porque permitía la existencia de gobiernos de minoría y toleraba la acción de pequeños grupos que practicaban la violencia. Esos factores, entre otros, dieron cuenta del avance democrático de nuestro pueblo.

Estamos conscientes de que la recuperación y la realización de la esperanza de la democracia plena y avanzada dependerá en gran medida de nuestro propio esfuerzo y el de la amplia mayoría del pueblo chileno, que no ha renunciado a su afán de liberación.

La primitiva intención ordenadora y de restauración institucional declarada por la Junta de Gobierno, se ha transformado en dictadura cada vez más personalista. La ciudadanía sin expresión y hasta sin existencia oficial; la Constitución y las leyes interpretadas y vueltas a interpretar arbitrariamente; los derechos humanos gravemente atropellados; las instituciones sometidas a un desmantelamiento progresivo; el orden basado en el temor y no en el respeto a la ley; la implantación permanente del estado de sitio y la indisciplinada intención de perpetuarse en el poder, caracterizan el tiempo que vivimos. Todo ello en medio del retroceso del país, el empobrecimiento y desesperanza de los más débiles y el aislamiento internacional.

Tal conjunto de realidades es una demostración evidente de que las naciones no pueden ser dirigidas con el solo respaldo de la fuerza, sino por quienes sean auténticos representantes del pueblo e interpreten sus anhelos en una visión del desarrollo tanto en lo político como en lo económico, social y cultural.

Si otros grupos fueran los dominantes e hicieran uso de los mismos mecanismos que ahora se practican, los rechazaríamos vigorosamente, como lo hicimos siempre. Nos negamos y negaremos a someternos a la voluntad totalitaria, por contradecir las aspiraciones más profundas de la persona humana, la justicia y la libertad, que son principios fundamentales del Partido Demócrata Cristiano.

La situación chilena se agudiza por el acostumbramiento que produce el silencio ideológico y la insistente concientización oficialista de que no existe alternativa para el actual régimen. El Gobierno, con el apoyo de todos los que miran hacia atrás, procura legitimar su autoridad en el desprestigio de las ideas y de la democracia misma. A pesar de todo no puede impedir que se vean las manos de la ultraderecha económica y política, vinculada a los consorcios internacionales y de los sectores neofascistas empeñados en imprimir su orientación en el régimen vigente y en evitar el rescuerdo entre los chilenos y el de éstos con su única tradición, la tradición democrática.

Ninguna imposición ha podido evitar durante este tiempo que las ideas sigan su marcha y que el proceso social prefigure un cambio de grandes magnitudes en el que nuestros planteamientos sirvan a la inevitable democracia avanzada de los años que vienen.

Realidad actual, bajo el poder de la Junta

El régimen vigente se mantiene sólo porque dispone arbitrariamente de la fuerza y por el silencio obligado de las opiniones discrepantes. Su permanencia en el poder deteriora cada día más su imagen, hace disminuir el número de sus adeptos y necesariamente debe provocar en la conciencia de quienes tienen el mando y no están comprometidos, la interrogante de su justificación.

Tres años calificados de emergencia permanente y en gran parte de guerra interna, de estado de sitio siempre renovado, no son, por cierto, demostración de apoyo nacional. Se ha llegado incluso hasta desconocer por los Tribunales el recurso de amparo, lo que es inaceptable. Es demasado tiempo en Chile para seguir viviendo al margen de su historia.

De nada vale la tentativa institucionalizadora a través de Actas Constitucionales, dictadas con desconocimiento absoluto de la voluntad popular, por los mismos que pretenden consagrarse indefinidamente en el poder. Su autoridad no tiene título para ello. La base política del Estado sólo puede establecerse por una Constituyente y Referéndum de la Nación.

Derechos Humanos

Defenso, el pueblo de Chile ha sido víctima del atropello sistemático de los derechos humanos. Una profunda huella ha quedado marcada y es necesario borrarla. Sin hacer un recuento hacia atrás, aún se pregunta por cientos de desaparecidos, y después de la anunciada liberación de presos políticos se ha sabido de otros nuevos. Todavía a fines de 1976, con fundamento, se presumía como recién desaparecidos a dirigentes sindicales y profesores universitarios. A lo menos debe garantizarse que los organismos de seguridad no son medios de represión ideológica y todos los chilenos tengan la posibilidad de defender sus derechos ante una justicia independiente.

Por estar entre las primeras naciones firmantes de la Declaración de los Derechos del Hombre, vigente como ley entre nosotros, tenemos presente que por ella se exige en primer lugar el respeto a las personas, que tanto se ha vulnerado, pero que son igualmente exigibles las libertades de opinión y expresión como las de reunión y asociación; las elecciones por sufragio incondicionado; el derecho al trabajo y a que los sindicatos expresen libremente la voluntad de sus asociados; el derecho

a poseer la nacionalidad y a vivir en el propio suelo y no dispersos por el mundo. Esos compromisos están lejos de cumplirse y sólo la más pronta recuperación democrática permitirá el restablecimiento pleno de esos derechos.

Lo Internacional

La pérdida de la libertad y de la democracia y el atropello a los derechos humanos han tenido para Chile efectos internacionales de importante repercusión, que no pueden hacerse aparecer como consecuencia de la campaña del comunismo internacional. No podemos continuar compareciendo como Nación acusada y condenada abrumadoramente no sólo en las Naciones Unidas y en la OEA, ni como objeto de juicios críticos de los más destacados dirigentes democráticos, humanistas y religiosos de diferentes partes del mundo.

Como consecuencia de ello, se vieron afectadas las posibilidades de renegociación de la deuda externa; se cesaron, disminuyeron o dificultaron los créditos en fuentes habitualmente abiertas; y los beneficios de la ayuda militar se interrumpieron y el aprovisionamiento fue entrabado, obligando al país a desembolsos mucho mayores. Por motivos diferentes, esta situación también ha influido en el grado de nuestras relaciones con distintas naciones. De hecho fuimos excluidos del Tercer Mundo y ahora puede acentuarse nuestro aislamiento en el mundo occidental. La perspectiva democrática ciertamente se fortalece y así lo demuestran los acontecimientos de países que vivieron largo tiempo bajo regímenes autoritarios, como España y Portugal, y la evolución que se advierte hasta en algunas naciones de Latinoamérica. Es probable esperar al mismo tiempo que la posición democrática tan decisivamente confirmada en las recientes elecciones norteamericanas, trascienda y se refleje en todo el mundo, dentro del más pleno respeto a la autodeterminación de los pueblos. Para Chile es esencial y urgente recuperar su imagen democrática en el concierto internacional.

También se han visto afectadas nuestras relaciones con los países latinoamericanos. La fase más importante del proceso de integración, que con tanto esfuerzo se había logrado hasta que cristalizara en el Pacto Andino, ha terminado para Chile, quedando al margen de él. Dos cláusulas dieron pretexto para ello: el tratamiento de las inversiones extranjeras, que se desaba sin las necesarias limitaciones, en la esperanza de atraerlas en mayor grado, y el de las rebajas arancelarias a terceros países, que se quería liberalizar al máximo mientras los demás miembros sólo aceptaban niveles compatibles con el resguardo de su desarrollo industrial. Nos desvinculamos así de una política de alcance trascendental, cuando tal vez era más necesaria la mejor relación, especialmente con nuestros vecinos, Bolivia y Perú, para resolver satisfactoria y definitivamente la salida de Bolivia al Pacífico. Esta gestión, paralizada en la actualidad, habrá que reanudarla superando las discordancias, porque no pueden crearse tensiones ni estimularse recelos entre nuestros pueblos, que perturben su amistad, induzcan a sentir afectada su seguridad nacional y provoquen la emulación en el fortalecimiento militar. No corresponde buscar la Cuenca de la Plata como alternativa del Pacto Andino porque no se oponen entre sí, dada la naturaleza diferente de dichos acuerdos. Nuestras relaciones con los países del Atlántico, especialmente con Argentina, siempre, por cierto, deben acrecentarse. Es de esperar que después del próximo fallo arbitral sobre el Beagle, que resolverá definitivamente el diferendo en esa zona, favorezca la urgente acción conjunta de ambos países en su proyección antártica. El aislamiento internacional que la propia política seguida ha ido configurando, nos obliga a hacer profundas rectificaciones.

La situación económica y su costo social

Termina 1976 con un balance económico precario, que se convierte en aterrador por el costo social que ha provocado. Después de tres años de aplicación sistemática, progresiva y sin restricción de la política económica impuesta por la Junta, todavía se pretenden atribuir su fracaso a la situación heredada del Gobierno anterior, adicionándole con la recesión y el bajo precio del cobre.

Nosotros fuimos opositores a una política en que el Presupuesto Fiscal estaba desfinanciado en más de la mitad y el desabastecimiento era generalizado. No olvidamos el desequilibrio de la Balanza de Pagos, el consiguiente crecimiento de la deuda externa y el agotamiento de las reservas, y menos que la inflación superó el 500 por ciento anual y provocó una paralización de la economía.

Todo lo anterior lo dijimos a su tiempo. Sin embargo, no es aceptable que para tener términos de comparación más favorables se pretenda que la inflación de esa época fue del mil por ciento anual.

Para afrontar la situación existente, el Gobierno ha dispuesto de poderes absolutos. Sus resoluciones, órdenes y contraórdenes operan por decreto; ha impedido las justas reivindicaciones de los trabajadores y ha silenciado su voz; ha controlado el acceso a la información y la forma como ésta se da a conocer, y a nadie da cuenta de sus actos. Nunca en la historia de Chile un Gobierno ha contado con tales y tan prolongadas facultades.

Es imposible hacer un análisis detallado de la situación económica y social, pero es necesario, al menos para este documento, señalar lo más significativo.

Llegamos el año que termina al 175 por ciento de inflación, con lo que se entra en los tres años un promedio del 300 por ciento. El producto bruto por habitante ha descendido a términos de hace diez años, en circunstancias que una parte importante del resto del mundo y especialmente de América

Latina prosperan. El sector industrial con casi la mitad de la capacidad instalada ociosa, enfrentado en muchos rubros al cierre o la quiebra, la construcción paralizada y provocando la agudización del déficit de viviendas, la grave declinación de las inversiones que provocará la detención del desarrollo a mediano y a largo plazo. La agricultura descapitalizada y en crisis progresiva y el comercio abocado a la depresión del poder de consumo. Sin embargo se habla de despegue.

En el campo social, la cesantía fluctúa entre un 15 y un 20 por ciento de la fuerza de trabajo, según sea la estación del año y sin contar el Empleo Mínimo. Se aumentan los desniveles en la distribución del ingreso y se amplían los sectores de extrema pobreza. El poder adquisitivo de sueldos, salarios y jubilaciones ha disminuido en términos reales en un 40 por ciento en relación a 1970. La falta de expectativas termina por desalentar a los obreros especializados, técnicos y profesionales y provoca la emigración del país. El descenso en las prestaciones de salud, vivienda y educación se une, además, a la creciente deserción escolar básica, media y universitaria. Esta oscura descripción tiene un sentido: mostrar donde conduce la pertinencia en imponer un modelo económico a cualquier costo.

De la estatización acelerada de la economía, en el período anterior, se ha pasado a la privatización desorbitada actual, con olvido de la eficiencia, primero, y del resguardo del interés público, después. Se ha permitido un proceso de concentración monopólica de gravísimas consecuencias políticas, económicas y sociales que dañará las bases fundamentales del desarrollo del país y que será de responsabilidad de quienes detentan el poder.

Sólo algunos aspectos financieros presentan mejoría relativa en relación con 1975: el equilibrio del Presupuesto Fiscal en moneda corriente, conseguido a costa de la disminución drástica de los gastos de inversión de capital, mientras el presupuesto en moneda extranjera continúa deficitario, principalmente por el servicio total de la deuda externa que no ha podido renegociarse. El otro es la Balanza de Pagos transformada en positiva, mediante el aumento de las exportaciones no tradicionales, pero fundamentalmente por la aguda restricción del consumo y de la actividad económica del país.

Entre tanto, la reducción de aranceles aduaneros y la mantención artificialmente baja del valor del dólar frente a la inflación, junto al monto usurario de los intereses y las altas tasas impositivas, hacen que la producción esté gravemente alterada y que los recursos se orienten a las inversiones especulativas.

La política seguida se ha pretendido identificarla como Economía Social de Mercado, sin que el mercado tuviera las características de amplitud, libertad y fluidez requeridas, ni contara con el apoyo de capital y tecnología necesarios. Además, para que fuera social, debía garantizar la libre participación de los trabajadores en la gestión económica y señalarse objetivos que significaran un mejoramiento real de los sectores medio y de más baja renta. Terminó siendo una política de exagerado liberalismo económico que, por la aplicación del tratamiento de "shock" se hizo aún más regresiva.

Rechazamos esta política económica por ser contraria al interés nacional y especialmente al de los trabajadores. Creemos en la necesidad de implantar una planificación democrática y de establecer una regulación general de la economía, con el fin de detener la inflación, promover las inversiones productivas, garantizar el trabajo estable e impulsar un desarrollo integral que asegure preferentemente la participación y el bienestar de los sectores laborales del país.

II La acción del Partido Demócrata Cristiano.

El Partido Demócrata Cristiano, enfrentado a difíciles circunstancias, ha mantenido su existencia y afirmado su razón de ser. Es un deber mencionar a Patricio Aylwin, que afronta la primera y difícil responsabilidad de dirigirlo y ante quien lealmente planteamos nuestras posiciones, y recordar a Ricardo Valenzuela, que nos legara el ejemplo extraordinario de su vida entregada a los ideales del Humanismo Cristiano.

Bernardo Leighton y Anita, por dar testimonio irreductible de sus ideas, han sobrevivido milagrosa y duramente a un ataque que debió ser mortal; Renán Fuentealba y Claudio Huepe fueron expulsados con vejamen del país, lo mismo que Jaime Castillo, cuando su imagen surgía como unificador de la defensa democrática. Por servirlo, Pedro Araya fue torturado; Belisario Velasco y Alberto González, relegados; Manuel Bustos, Martín Poblete y tantos más presos sin juicio mientras que centenares de dirigentes sindicales, juveniles, poblacionales y campesinos eran perseguidos. A ellos el Partido les debe gratitud por haber enfrentado con dignidad y sacrificio personal la defensa de los ideales comunes.

Ni las clausuras de "Política y Espíritu" y Radio "Presidente Balmaceda"; ni las expulsiones de profesores universitarios, de funcionarios de la administración pública y de líderes sindicales han debilitado la voluntad de la Democracia Cristiana para estar en la vanguardia de las fuerzas democráticas.

Ciertamente hombres y mujeres de otras tendencias han surgido más que nosotros. Ante ello, hemos dejado testimonio de nuestra protesta, actuando en defensa de sus derechos y expresando nuestro mensaje de solidaridad.

El rechazo para integrar el consejo del estado, su libro denuncia sobre la situación del país y la polémica sobre el Pacto Andino son tres positivas actitudes del ex presidente Frei; la presentación a la Corte Suprema, hecha conjuntamente con líderes de otros partidos, en resguardo de los derechos ciudadanos y las defensas planteadas ante los tribunales en juicios de trascendencia política; la carta suscrita por

Jaime Castillo, Hector Valenzuela y Andrés Aylwin a los Cancilleres reunidos en la Conferencia de la OEA, en que se acusa la violación de los derechos humanos, constituyen manifestaciones coherentes pero espontáneas de afirmación ideológica, que muestran la vitalidad potencial del Partido. Igualmente lo son las públicas defensas de los derechos sindicales hechas por destacados dirigentes de los trabajadores, que integran el Grupo de los Diez y las posiciones sostenidas por periodistas y por autores de algunos libros.

Desde el comienzo de la actual crisis política hubo juicios distintos en su apreciación, pero siempre enraizados en el modular de la doctrina partidaria. Legítimos en su expresión fueron nuestras concepciones, valoraciones y temperamentos diferentes que enriquecen la comunidad democrata-cristiana y corresponden a la tradición partidaria. Este y otros documentos, entregados en el curso de estos años, manifiestan nuestro punto de vista que hemos considerado más ajustado a la realidad.

Es tarea de quienes dirigen procurar incansablemente el consenso y asegurar una participación plena a todos los niveles para encauzar unitariamente la acción; es su deber ir asignando funciones y responsabilidades y entregando información y respaldo a la base, como recibiendo de ella, de modo que la unidad del Partido sea fruto de una confluencia de opiniones inspiradas en idénticos principios fundamentales.

Ante situaciones complejas o crisis profundas se producen a veces incompatibilidades políticas que el Partido debe definir con claridad. Debe saberse públicamente que en el caso actual están fuera del Partido quienes opten por el colaboracionismo y acepten cargos políticos de la confianza del régimen u obtengan posiciones ilegítimas al amparo del poder.

A pesar del relajamiento aparente de la dureza inicial del Gobierno, cada día se comparte más en el Partido la posición de rechazo al régimen vigente, que originalmente sostuvieramos. La independencia crítica y activa y aun la oposición, en último término, pueden interpretarse como referidas a una autoridad legítima y estable, como una especie de reconocimiento del sistema político establecido. Por eso, sostenemos la necesidad de un cambio fundamental del régimen o bien su sustitución para permitir la recuperación democrática. Concebimos hoy al Partido Demócrata Cristiano como fuerza moral, social y política impulsora y de vanguardia para recuperar los valores históricos de Chile. Nuestra posición tiene una profunda raigambre popular y capacidad humana suficiente como para hacer un aporte determinante y avanzar en la difícil y compleja reconstrucción del país, después de los procesos tan contradictorios que ha vivido en el último tiempo.

La angustia por esta responsabilidad y el convencimiento de que para poder cumplirlo cabalmente son necesarias la participación y movilización de todos los que sentimos los ideales del Humanismo Cristiano, reviven el espíritu inicial del Partido y nos impulsan a redoblar nuestra acción. Hubiéramos querido que esta consulta, destinada a actualizar la orientación partidaria y a darnos una directiva para que la cumpla, fuese hecha en la forma más amplia posible a las bases, a los trabajadores, a las mujeres y a la juventud, que están diariamente en la lucha, así como al mayor número de dirigentes que están dentro y fuera del país. No ha sido posible porque existían normas que la regulaban de otra manera. En el futuro, mientras no opere el funcionamiento de los organismos partidarios pertinentes, será necesario ampliar el sistema de consulta para que la representatividad sea mayor y más equitativa y no deje de escucharse y considerarse ninguna opinión positiva.

Ante un llamado para incorporarnos a la actual Directiva decidimos participar porque se advertía la falta de presencia en ella de quienes habíamos propuestos distintos planteamientos. Las bases querían vincularse a la acción partidaria, recibir información y orientación y participar en las decisiones. Las deficiencias en este sentido deben superarse con el mayor esfuerzo y prontitud. Movidos con ese ánimo decidimos participar en esta Consulta para procurar la más amplia y real integración y contribuir a formular la orientación que se imprima al partido.

Para tener eficacia en las decisiones, éstas deben adoptarse con rapidez y maduración, como producto de una voluntad de encuentro, capaz de generar la única fórmula válida de unidad y disciplina. Debe haber una adecuada renovación de equipos técnicos e intelectuales y un reconocimiento de la experiencia política, configurando órganos partidarios integrados e integradores, en las diversas esteras de actividad.

Con ese criterio amplio y ecuaníme creemos que deberán ser resueltos todos los asuntos partidarios. La situación global de Radio "Presidente Balmaceda" especialmente lo relativo a la eliminación de un valioso equipo de periodistas que le había impreso carácter desde el inicio del régimen militar. El cumplimiento de los acuerdos establecidos para asegurar la plena participación de las organizaciones sindicales en los centros de formación que tengan acceso. La pronta y completa integración de los cuadros directivos de la juventud en la forma más representativa de las bases. La mayor apertura y participación en las distintas actividades intelectuales vinculadas al movimiento y en las oportunidades de contacto internacional.

La Comisión Política, de limitada actividad hasta el momento, tendrá que orientar al Partido y representar la alta expresión del consenso y, con la colaboración de equipos especializados en constante análisis de la realidad nacional e internacional, deberá ir precisando el proyecto de sociedad comunitaria a que aspiramos y trazando la estrategia de acción unitaria a seguir. La Directiva Nacional será responsable de implementarla y ejecutarla a través de los frentes y las estructuras regionales, hasta la base misma. La Directiva Nacional y la Comisión Po-

lítica resolverán en conjunto aquellas materias de especial importancia.

Constantemente se nos ataca, desfigurando nuestras ideas y actuaciones sin permitir la réplica; tratando de contenciar; procurando inútilmente dividirnos. Es explicable. Más allá del receso político, la Democracia Cristiana es un hecho que se identifica con la inquietud y la esperanza de gran parte de los chilenos. De ahí la trascendencia de nuestra tarea, que nos obliga a estimular un movimiento de opinión y a cohesionar un poder social, capaces de constituirse en alternativa para impulsar la superación del presente y respaldar después, a quienes dirijan la Nación, hacia una democracia de gran base popular, representativa de todos los chilenos.

III La Democracia Cristiana y los demás movimientos políticos.

La Democracia Cristiana, por estar enraizada en toda la gama de las fuerzas sociales, especialmente de los trabajadores, tiene la responsabilidad de ser su vanguardia y cauce de sus aspiraciones profundas.

Uno de los problemas más graves que condujeron a la ruptura institucional que hizo crisis en 1973 fue la incapacidad que tuvieron las fuerzas políticas para constituirse en canales adecuados de comunicación entre los movimientos sociales y la estructura jurídico-política. Nuestro Partido debe ser el primero en comenzar ese proceso de renovación indispensable, para dar lugar y promover el gran consenso nacional a partir de la base social.

Su trayectoria democrática, su actitud abierta y ajena a sectarismos, la significación que alcanzara entre las tendencias políticas, le permite conseguir el grado de confianza necesario para ser punto de encuentro. Quienes busquen la recuperación democrática deben estar dispuestos a constituir una mayoría social y política que le dé futura sustentación, aunque dicho compromiso no signifique compartir responsabilidades de Gobierno.

Esta posición de convergencia que deriva de la coyuntura política actual, para que sea factible deberá estar desligada de toda sospecha de mezquindad y provecho en favor de fórmulas o personas determinadas, para asegurar el mutuo respeto en el diálogo.

En la interacción de las fuerzas sociales y políticas tras un proyecto democrático que la Democracia Cristiana debe promover, es necesario la presencia de todas las posiciones representativas de la base social, cualesquiera sean las diferencias que existan entre ellas.

La proscripción y el receso impuesto a los partidos y la falta de debate público, crean un aparente vacío político que favorece a quienes saben operar subterráneamente, disgregan a los que pudieran sentirse sin motivaciones, cohesión y fortalece a quienes creen y viven un ideal. Al no encontrar contendor, los que imponen el receso y la censura creen poseer definitivamente el apoyo popular, porque no hay quienes hagan presentes los errores que se cometen y las rectificaciones necesarias.

Los partidos políticos son corrientes orgánicas de opinión, expresión de pluralismo ideológico e intermedios válidos de las inquietudes sociales, los que pasan a articular en el Estado. Por esas razones, constituyen uno de los factores fundamentales de la democracia. Cualquiera que sea su identificación filosófica, ellos presentan un cuadro de ideas generales y una visión sistemática de los problemas nacionales, entre los cuales los ciudadanos deben poder optar para que haya real democracia. Los partidos son estructuras de participación política que facilitan el perfeccionamiento de las ideas y la concepción de programas que anticipen nuevas realidades. Esto es indispensable para una democracia moderna que exige planificación para el desarrollo. Por último, las instancias partidarias permiten la selección de líderes, dirigentes y representantes, para la renovación de los cuadros políticos y la rectificación de sus errores.

La politiquería y la demagogia, la constitución de castas dirigentes no son vicios propios de lo político o de la democracia. Pero aunque así sea, debemos proponer a la ciudadanía un Estatuto de Partidos Políticos que resguarde la democracia interna; esclarezca sus mecanismos de financiamiento y garantice los medios de información a la base. En fin, debe evitar la constitución de oligarquías partidarias que destruyen la grandeza de lo político. Para superar los vicios históricos que mantuvieron largamente al país bajo gobiernos de minorías que vieron entorpecida su acción, será necesario evitar la proliferación de pequeños grupos partidarios que carezcan de representatividad significativa.

A pesar de las circunstancias impuestas, el esquema político básico de Chile se mantiene y debemos tomarlo en cuenta. Sus lineamientos corresponden por lo demás a las grandes pautas ideológicas universales.

Será un error, sin embargo, desconocer que en el último tiempo de turbulencia o de silencio se ha ido incorporando una nueva generación que hará su propia búsqueda de la verdad cuando recupere su calidad ciudadana y libre.

En este cuadro, la Unidad Popular quiere subsistir como representante formal de las fuerzas marxistas y de otros partidos que conjuntamente fueron responsables del Gobierno anterior. La U.P. fue una alianza de Gobierno. Creemos que ahora cada partido debe asumir su propia visión y su propia responsabilidad para hacer factible la recuperación democrática y pensamos que ese proceso debe ir produciéndose más bien desde la base, haciendo palpable y visible un acuerdo en tal sentido de amplia aceptación.

Dentro de la Unidad Popular, la equivalencia potencial del socialismo en relación al Partido Comunista se ha visto debilitada por las alternativas de su proceso interno, y la gravitación de las otras fuerzas integrantes de matiz democrático no alcanza un grado de in-